



O F I C I O

S/REF.: Expedientes nº **001-022299, 001-022301 y 001-022303**

FECHA: 2 de abril de 2018

ASUNTO: Relación nominal de los funcionarios destinados en la Comisaría Local de Gijón.

DESTINATARIO: PORTAL DE LA TRANSPARENCIA

En contestación a las solicitudes de información efectuadas a través del Portal de la Transparencia por [REDACTED] con números de expediente arriba referenciados, que tuvieron entrada en esta Dirección General el día 12 de marzo del presente año, solicitando *“la relación nominal de los funcionarios adscritos a la Comisaría de Policía de Gijón y retribuciones individualizadas”*, este Centro Directivo, ha resuelto denegar el acceso a la información solicitada conforme a los artículos 14.1 d) y 15.3 la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Esta inadmisión se fundamenta en que facilitar la relación nominal de los funcionarios policiales con sus retribuciones individualizadas destinados en la Comisaría Local de Gijón, supone un perjuicio para la seguridad pública, en la medida en que el conocimiento del número concreto de funcionarios de la citada dependencia, da lugar a la determinación o análisis de una mayor o menor seguridad de los servicios asignados, poniendo en peligro la intervención de los mismos, en cualquier dispositivo establecido para dar cumplimiento al mandato constitucional del artículo 104 que encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, ayudando a personas individuales o grupos criminales organizados, a la planificación de acciones delictivas, y así, por un lado impedir el restablecimiento de la paz colectiva y por otro poner en peligro a los funcionarios policiales intervinientes.

Asimismo, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.



Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

EL DIRECTOR GENERAL

German López Iglesias